

Dit 1

Hoyada  
Reapertura.

Bogotá D.C., septiembre 16 de 2019.

Doctor.  
CARLOS ALBERTO CUENCA CHAUX.  
Presidente Cámara de Representantes.  
Ciudad.



En el marco de la discusión y aprobación del proyecto de ley No. 209 de 2018 Cámara "por el cual se autoriza a la asamblea del departamento de Antioquia para emitir la estampilla prohospitales públicos del departamento de Antioquia.", me permito presentar la siguiente


#### PROPOSICIÓN.

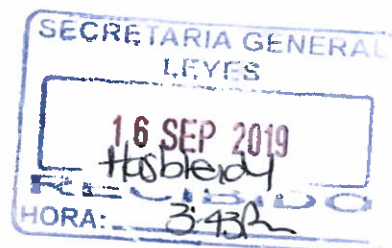
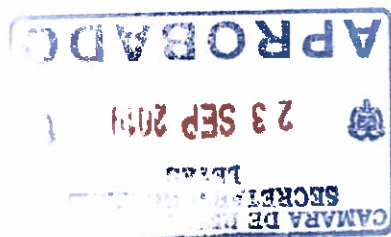
Modifíquese el inciso segundo del artículo 1º. del presente proyecto de ley, el cual quedará de la siguiente manera:

(...)

La suma recaudada se asignará por la Asamblea Departamental, de acuerdo a las necesidades que presenten los hospitales públicos de los diferentes niveles.

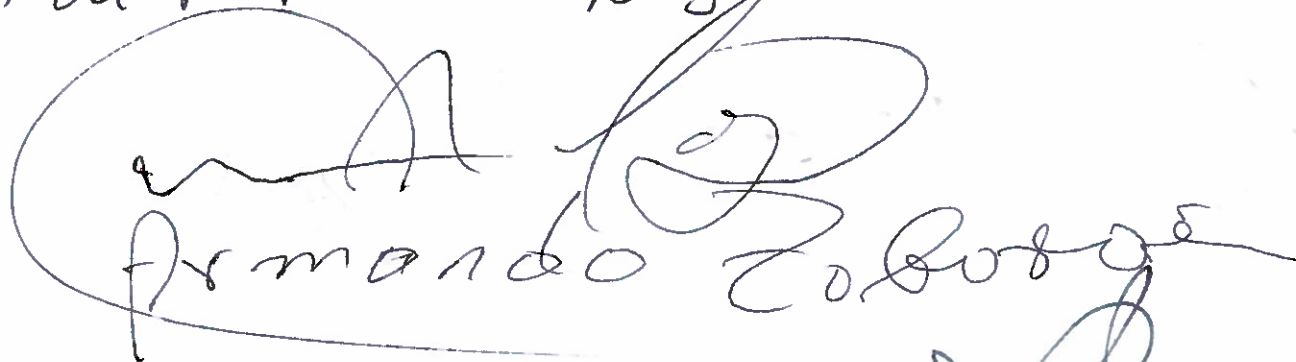
  
MARTHA VILLALBA RODWALKER.  
Representante a la Cámara.

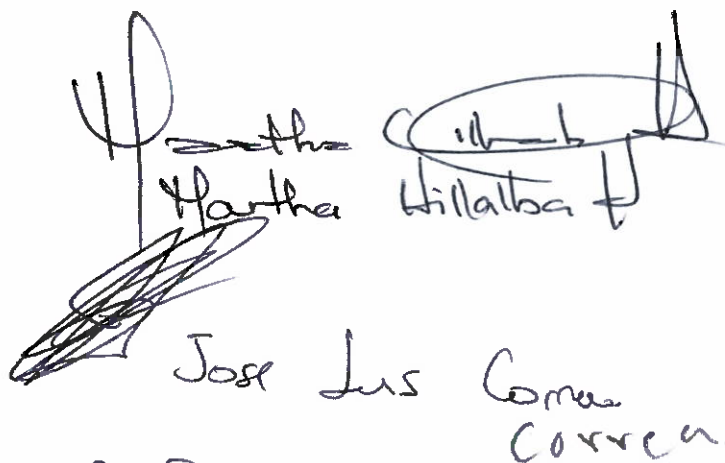
  
MONICA MARIA RAIGOZA MORALES.  
Representante a la Cámara.

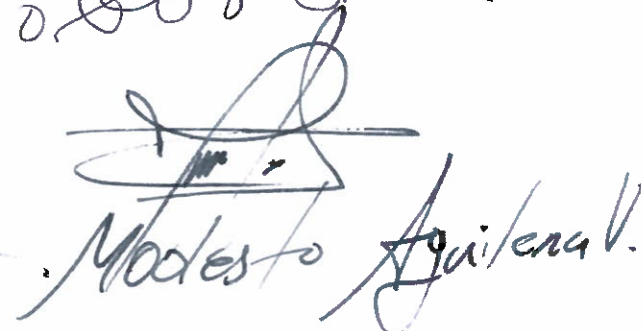


# PROPOSICIÓN

SOLICITAMOS SE REABRA  
EL ARTICULO PRIMERO.  
Con la proposición Negativa.

  
Armando Zolobog

  
Martha Hillalbat  
Jose Luis Correa  
Correa

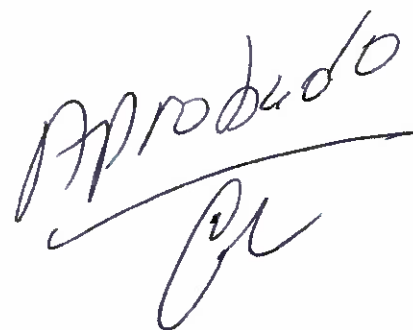
  
Modesto Aguilera

Subsecretaría General

Fecha: SEP 23/19

Hora: 6:28 PM

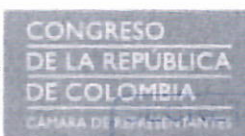
  
Elizabeth Pay-Pang

  
Aprobado

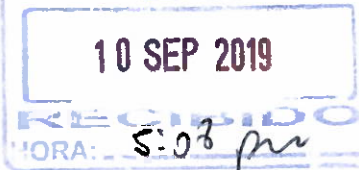




Prít 3



Dvar.



## PROPOSICIÓN DE MODIFICACIÓN:

**Modificación al artículo 3 del Proyecto de ley número 209 de 2018 Cámara**  
**"Por medio de la cual se autoriza a la Asamblea del departamento de Antioquia**  
**para emitir la estampilla Pro-Hospitales Públicos del departamento de Antioquia"**

De conformidad con lo manifestado durante la sesión de la plenaria de la Cámara de Representantes durante el día de hoy y los dispuesto en el artículo 112 de la Ley 5 de 1992, solicito la **MODIFICACIÓN** del artículo 3 en el **Proyecto de ley número 209 de 2018 Cámara**, el cual quedaría así:

**Artículo 3. ATRIBUCIÓN:** Autorizase a la Asamblea del Departamento de Antioquia para que determine las características, tarifas, hechos económicos, sujetos pasivos y activos, las bases gravables y todos los demás asuntos referentes al uso obligatorio de la estampilla en las operaciones que se deban realizar en los diferentes municipios del departamento de Antioquia.

La asamblea departamental de Antioquia facultará a los concejos de los municipios del Departamento, para que hagan obligatorio el uso de la estampilla, cuya emisión se autoriza por esta ley y siempre con destino a las instituciones señaladas en el artículo 1° de la presente ley.

**PARAGRAFO: Se excluyen de este pago los contratos de prestación de servicios suscritos con personas naturales, cuyo valor no supere las 145 Unidades de Valor Tributario - UVT por concepto de honorarios mensuales.**

Cordialmente,

Mauricio Pardo

Jorge D. Gómez

Comandante

Leon Pardo M.

**JORGE ALBERTO GÓMEZ GALLEGU**  
Representante a la Cámara por Antioquia

Esai Ego

oscar Pardo

JorgeGomezRepresentante@gmail.com - www.JorgeGomezRepresentante.org

Medellín: calle 54 #42 - 57 tercer piso. | Teléfono: 577 11 92

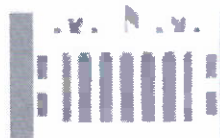
Bogotá: edificio nuevo del Congreso, oficina 606 - 607B | Teléfono: 432 5100 Ext 4160



**JORGE GÓMEZ**

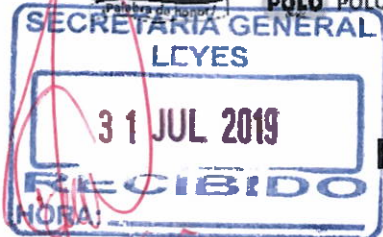
Representante a la Cámara por Antioquia

POLO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO



CONGRESO  
DE LA REPÚBLICA  
DE COLOMBIA  
CÁMARA DE REPRESENTANTES

Av13



## PROPOSICIÓN DE MODIFICACIÓN:

**Modificación al artículo 3 del Proyecto de ley número 209 de 2018 Cámara**  
**"Por medio de la cual se autoriza a la Asamblea del departamento de Antioquia**  
**para emitir la estampilla Pro-Hospitales Públicos del departamento de Antioquia"**

De conformidad con lo manifestado durante la sesión de la plenaria de la Cámara de Representantes durante el día de hoy y los dispuesto en el artículo 112 de la Ley 5 de 1992, solicito la **MODIFICACIÓN** del artículo 3 en el **Proyecto de ley número 209 de 2018 Cámara**, el cual quedaría así:

**Artículo 3. ATRIBUCIÓN:** Autorízase a la Asamblea del Departamento de Antioquia para que determine las características, tarifas, hechos económicos, sujetos pasivos y activos, las bases gravables y todos los demás asuntos referentes al uso obligatorio de la estampilla en las operaciones que se deban realizar en los diferentes municipios del departamento de Antioquia.

La asamblea departamental de Antioquia facultará a los concejos de los municipios del Departamento, para que hagan obligatorio el uso de la estampilla, cuya emisión se autoriza por esta ley y siempre con destino a las instituciones señaladas en el artículo 1° de la presente ley.

**PARAGRAFO: Se excluyen de este pago los contratos de prestación de servicios suscritos con personas naturales, cuyo valor no supere las 160 Unidades de Valor Tributario – UVT por concepto de honorarios mensuales.**

Cordialmente,

**JORGE ALBERTO GÓMEZ GALLEGO**  
Representante a la Cámara por Antioquia

JorgeGomezRepresentante@gmail.com - www.JorgeGomezRepresentante.org

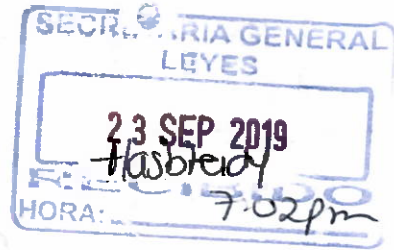
Medellín: calle 54 #42 - 57 tercer piso. | Teléfono: 577 11 92

Bogotá: edificio nuevo del Congreso, oficina 606 - 607B | Teléfono: 432 5100 Ext 4160

# Proposición


Se solicita se aplaque y se realice una subcomisión  
para debatir las proposiciones entorno al  
Proyecto actual

José Luis Gómez



Retirado  
SEP 23/19

ESTADO PROYECTOS CREADOS

Proyecto	Tipo de proyecto y fecha de radicación	Estado	Fecha actuaciones	Actuaciones	Pendiente	Ponentes	Observaciones
065 2019 C Ejemplar consumidor	Ley Ordinaria	Primer debate Comisión 3ra Cámara	18/09/2019	Elaboré ponencia	Que presenten la ponencia primer debate	Coordinador Silvio Carrasquilla, Salim Villam, Zaharain, Sara Piedrahita	
066 2019 C Tarifa conducción	Ley Ordinaria 23 de julio de 2019	Primer debate Comisión 5ta de Cámara			Hablar con el ministerio y con Adrian	Rodrigo Rojas	
164 2019 C Mando de obra local	Ley Ordinaria 14 de agosto de 2019	Primer debate en Comisión 7ma Cámara			Hablar con las oficinas de los ponentes	H.R. Juan Carlos Repinales Agudelo (Liberal Risaralda) M.R. Juan Diego Echavarría Sánchez (Liberal Antioquia)	
165 2019 C Internet Do fundamental	PAI 14 de agosto de 2019	Primer debate Comisión 1era de Cámara	17/09/2019	Radica la ponencia primer debate	Que se incluya en el orden de primera	Nosotros	
197 2019 C Corpa San Jorge	Ley ordinaria 21 de agosto de 2019	Primer debate Comisión 5ta Cámara	16/09/2019	Allegan concepto <b>anexo negativo</b> , por ser de iniciativa gubernamental y falta de soporte ecológico, técnico y ambiental.	Pedir concepto <b>corte constitucional</b> , y <b>alcaldes San Jorge</b> - Hablar con la oficina del Poinente.	H.R. Oscar Camilo Arengo Cárdenas (CS Vichado)	



Aval  
AW 2



AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

PROPOSICIÓN N° \_\_\_\_\_

**Proyecto de Ley N° 209 de 2018 Cámara, "POR EL CUAL SE AUTORIZA A LA ASAMBLEA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EMITIR LA ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES PÚBLICOS DE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"**

Modifíquese el párrafo 2 del Artículo 2, el cual quedará así:

**PARÁGRAGO 2°.** De conformidad con el artículo 47 de la ley 863 de 2003, los ingresos que perciban las entidades territoriales por concepto de estampillas autorizadas por la ley, serán objeto de una retención equivalente al veinte por ciento (20%) con destino a los fondos de pensiones de la entidad destinataria de dichos recaudos. En caso de no existir pasivo pensional en dicha entidad, esta podrá destinar los recursos de acuerdo al presente artículo.

Respetuosamente.

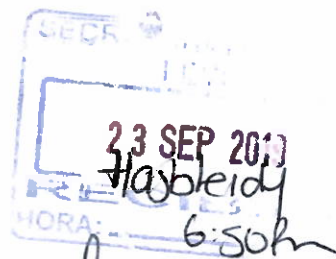
  
**JHON JAIR BERRIO LOPEZ**  
Representante a la Cámara-Antioquia  
Centro Democrático

Nidia Marcela Orozco

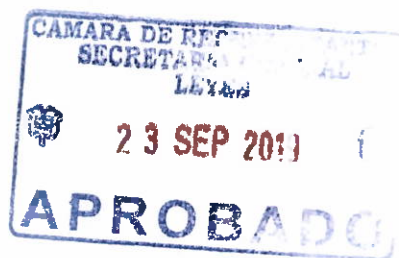


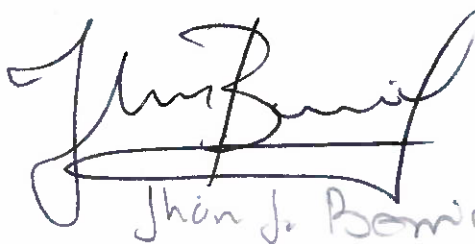
**H R Jhon Jairo Berrío López**

Proposición.



Retirar el parágrafo 1 del artículo 2.



  
John J. Benio

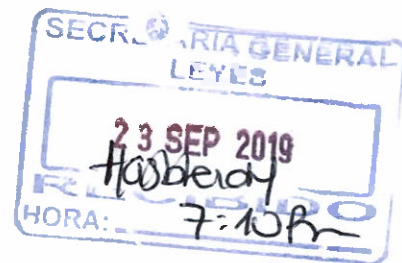


# Proposición

~~Artículo~~

Eliminar Numeral 1 y 2 del  
artículo segundo.

*Jiménez*



Avail  
AV12



AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

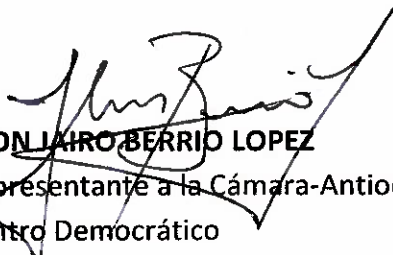
PROPOSICIÓN N° \_\_\_\_\_

**Proyecto de Ley N° 209 de 2018 Cámara, "POR EL CUAL SE AUTORIZA A LA ASAMBLEA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EMITIR LA ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES PÚBLICOS DE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"**

Modifíquese el parágrafo 1 del Artículo 2, el cual quedará así:

**PARÁGRAFO 1°.** *La Asamblea Departamental de Antioquia determinará en los presupuestos anuales de los años siguientes a la aprobación de esta ley los valores específicos que a cada rubro corresponda dentro de las partidas de gastos de cada uno de los hospitales públicos indicados en el artículo 1° de la presente ley, pudiendo destinar hasta un veinte por ciento (20%) para el pago de nómina del personal inherente al área de la salud.*

Respetuosamente.

  
**JHON JAIRO BERRÍO LOPEZ**  
Representante a la Cámara-Antioquia  
Centro Democrático

*Nada Marcela Ojono*  
*Refinada*

**H R Jhon Jairo Berrío López**

Bogotá, Carrera 7 N° 8 – 68 Edificio Nuevo del Congreso  
Oficina 614 B - Tel: (57+1) 382 36 55

Medellín, Carrera 55 N° 40A – 20 Oficina 1005,  
Torre Nuevo Centro La Alpujarra Tel: (57+4) 232 68 01

 jberriolopez

 @jhonberriolopez

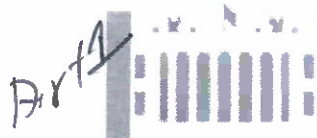
 jjberriolopez



**JORGE GÓMEZ**

Representante a la Cámara por Antioquia

**PQLO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO**



CONGRESO  
DE LA REPUBLICA  
DE COLOMBIA  
CÁMARA DE REPRESENTANTES

10 SEP 2019

REQUERIDO  
HORA: 5.08 pm

## PROPOSICIÓN DE MODIFICACIÓN:

**Modificación al artículo 1 del Proyecto de ley número 209 de 2018 Cámara**  
"Por medio de la cual se autoriza a la Asamblea del departamento de Antioquia  
para emitir la estampilla Pro-Hospitales Públicos del departamento de Antioquia"

De conformidad con lo manifestado durante la sesión de la plenaria de la Cámara de Representantes durante el día de hoy y los dispuesto en el artículo 112 de la Ley 5 de 1992, solicito la **MODIFICACIÓN** del artículo 1 en el **Proyecto de ley número 209 de 2018 Cámara**, el cual quedaría así:

**Artículo 1. OBJETO Y VALOR DE LA EMISIÓN:** Autorizase a la Asamblea del Departamento de Antioquia para que ordene la emisión de la estampilla "Pro-Hospitales" Públicos del Departamento de Antioquia, hasta por la suma de cuatrocientos mil millones de pesos (\$400.000.000.000) a precios constantes de 1999.

La suma recaudada se asignará así: el veinte por ciento (20%) para los hospitales públicos clasificados como tercer nivel, el cuarenta por ciento (40%) para los hospitales **públicos** clasificados como segundo nivel y el cuarenta por ciento (40%) para los hospitales **públicos** de primer nivel de atención.

Retiro la proposición Sep 23/2019  
6:15 pm

Cordialmente,

Juan D. Echazuri

Jorge Alberto Gómez Gallego

Camacho

**JORGE ALBERTO GÓMEZ GALLEGU**

Representante a la Cámara por Antioquia

Mauricio Pardo

Pasa Eugenio

Leon Pardo

LEON Pardo y Muñoz

JorgeGomezRepresentante@gmail.com - www.JorgeGomezRepresentante.org

Medellín: calle 54 #42 - 57 tercer piso. | Teléfono: 577 11 92

Bogotá: edificio nuevo del Congreso, oficina 606 - 607B | Teléfono: 432 5100 Ext 4160

## PROPOSICIÓN MODIFICATIVA

Por medio de la cual **se propone modificar el artículo 1°** del Proyecto de ley No. 389 de 2019 Cámara – 82 de 2018 Senado *“Por la cual modifica el artículo 4 de la ley 1882 de 2018”*, el cual quedará así:

**Artículo 1°. El artículo 4° de la Ley 1882 de 2018 quedará así:**

**Artículo 4°.** Adiciónese el siguiente párrafo al artículo 2° de la Ley 1150 de 2007:

**Parágrafo 7°.** La Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente o quien haga sus veces, adoptará documentos tipo que serán de obligatorio cumplimiento en la actividad contractual de todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

Los documentos tipo comprenderán, entre otros: las cláusulas correspondientes, requisitos habilitantes y alternativas de factores de ponderación, dentro de los que se tendrá en cuenta el domicilio del contratista, de conformidad con las obras, bienes o servicios objeto de la necesidad y sus requerimientos técnicos; Estudios del sector de conformidad con la clasificación de bienes y servicios; y los parámetros para el desarrollo del análisis inteligente de los mercados con sus variables en el orden nacional y local. Los documentos tipo deben representar buenas prácticas contractuales que procuren el adecuado desarrollo de los principios que rigen la contratación pública.

Para las entidades territoriales aplicarán todos los parámetros definidos en el inciso anterior, salvo los factores de ponderación los cuales se mantendrán de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 De la selección objetiva, establecido en la ley 1150 de 2007.

En la adopción de los documentos tipos, se tendrán en cuenta las características propias de las regiones, con el ánimo de promover el empleo local, la cuantía, la naturaleza y especialidad de la contratación, así como el proceso de capacitación para los municipios.

La Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente fijará un cronograma, y definirá en coordinación con las entidades técnicas o especializadas correspondientes el procedimiento para implementar gradualmente los documentos tipo, con el propósito de facilitar la

incorporación de estos en el sistema de compra pública y deberá establecer el procedimiento para recibir y revisar comentarios de los interesados, así como un sistema para la revisión constante de los documentos tipo, que expida. Una vez expedido cada documento tipo, las entidades públicas los adoptarán obligatoriamente dentro de los seis (6) meses siguientes, a su entrada en vigencia.



**HÉCTOR VERGARA SIERRA**  
Representante a la Cámara

## JUSTIFICACIÓN

Sin lugar a dudas hay que reconocer las bondades de este proyecto en la medida que es indispensable combatir el mal manejo que actualmente se presenta en muchos de los procesos de contratación pública en Colombia. Por lo anterior, se hace necesario establecer mecanismos que permitan contrarrestar dicho flagelo y garantizar la transparencia al interior de los mismos con la creación de herramientas armónicas con nuestro ordenamiento jurídico.

Si bien el proyecto tiene como objetivo principal establecer requisitos y parámetros estandarizados para lograr una mayor transparencia en todos los procesos de contratación estatal que lleven a cabo todas las entidades publicas, deben armonizarse todas las competencias constitucionales y legales de las autoridades, teniendo en cuenta la de las entidades territoriales descentralizadas, las cuales ocupan un lugar especial en la constitución de 1991.

En efecto, la constitución reconoce la autonomía de los entes territoriales, de tal manera que aunque el gobierno central tiene un poder de intervención sobre las reglas que rigen a dichas entidades, necesariamente dichas prerrogativas deben ser empleadas en un contexto donde no se elimine la autonomía territorial.

El artículo 1° de nuestra Carta Política consagra que: *“Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales (...)”* (subrayado fuera del texto).

Tales principios constituyen los pilares fundamentales y estructurales de la organización política, institucional y territorial de este país<sup>1</sup>. Así, al desarrollar el principio de **autonomía territorial**, la Corte Constitucional ha sido enfática en resaltar que *“(...) la autonomía, que es grado creciente de libertad, busca cada vez mayor y mejor autodeterminación de los habitantes del territorio para la definición y control de sus propios intereses (...)”*<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Corte Constitucional, Sentencia SU - 095 de 2018.

<sup>2</sup> Corte Constitucional, Sentencia C - 004 de 1993.



El principio en comento tiene un contenido básico que siempre debe ser respetado por el legislador, y de acuerdo con la Sentencia C – 004 de 1993, reúne cuatro requisitos esenciales, entre los cuales cabe destacar el relacionado con “(...) *el derecho de cada entidad territorial a ejercer libremente las competencias constitucionales y legales que le correspondan* (...)”.

En el mismo sentido la Sentencia C – 534 de 1996 estableció que la autonomía de las entidades territoriales no es un enunciado meramente formal que consiste en un simple traslado de competencias sino que “*se erige como un poder de dirección política que la comunidad de cada localidad, expresando su voluntad a través de los canales democráticos preestablecidos, reivindica para sí y ejerce por medio de sus representantes*”, y además “*se extiende y se concreta también en un poder de dirección administrativa, que presenta como principal objetivo la gestión de sus propios y particulares intereses* (...)”.

Así mismo la Corte Constitucional en Sentencia C-517 de 1992 resaltó la calidad de autonomía como propia de quien “*decide por sí mismo*”, sin ser este concepto sinónimo de soberanía o de “*grado máximo de libertad*”. El concepto de autonomía “*hace(n) referencia a un cierto grado de libertad en la toma de decisiones por parte de un determinado ente jurídico en relación con otro*”.

En este entendido, la autonomía actúa como un principio jurídico en materia de organización competencial. Dicho principio debe realizarse en la mayor medida posible, teniendo en cuenta la importancia de los bienes jurídicos. Además, tiene un carácter vinculante y obligatorio, estableciendo deberes y subordinando los demás preceptos del ordenamiento jurídico. Por esa razón la jurisprudencia constitucional afirmó que las responsabilidades de las entidades territoriales deben ser asumidas por ellas mismas, sin desconocerse el apoyo que les puedan brindar las autoridades nacionales por medio de capacidades compatibles con el “*nuevo orden*” (Corte Constitucional, Sentencia C-195 de 1997).

En la Carta Política colombiana, se encuentran disposiciones orientadas a garantizar que el principio de la autonomía de las entidades territoriales sea mucho más que una expresión sin significado ni relevancia jurídica. Tanto

el Título XI, Capítulo I. artículos 285 y siguientes -los cuales desarrollan el régimen territorial colombiano- como el artículo 311 -Marco de Funciones Municipales- son recurrentes al conceder facultades a los departamentos y municipios, para ejercer adecuadamente la prestación de los servicios públicos y la satisfacción de las necesidades sociales de sus habitantes. Específicamente, el artículo 311 constitucional se convierte en uno de los pilares fundamentales para la materialización de la autonomía de las entidades territoriales, toda vez que, comparadas la Constitución vigente, con sus predecesoras, se resalta que no se le daba un reconocimiento tan relevante a las entidades territoriales.

La discrecionalidad administrativa es un eje importante en la construcción del proceso contractual, especialmente, en la fijación de los pliegos de condiciones, porque permiten a la entidad elaborar bajo sus propias necesidades los aspectos para seleccionar al contratista, sujeta a lineamientos de orden procedimental que cumplen con los fines encomendados.

Colombia es un país muy diverso regionalmente, 32 departamentos y más de 1100 municipios con realidades económicas, sociales y políticas diferentes, donde pretender imponer un documento tipo no solo desconoce la autonomía de las entidades territoriales.

No es fácil estandarizar cuando estamos en un país tan diverso en sus realidades económicas y sociales, donde el acceso al conocimiento y la tecnología resulta muchas veces limitado, menos aún, cuando lo que se persigue no es facilitar la gestión contractual sino luchar contra la corrupción. Al respecto, vale la pena resaltar que fue acertada la redacción del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 cuando dispuso en su numeral 1 "...la exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato y a su valor...", esto reconoce que cada realidad a satisfacer es diferente, independiente a la tipología contractual, no resulta homogéneo un mismo contrato en un municipio que en otro, incluso, del mismo departamento.

Con fundamento en lo anterior, y para evitar posibles declaratorias de inconstitucionalidad, consideramos que antes de pretender estandarizar la forma en que debe desarrollar en su integridad el proceso de contratación



publica en todos los niveles de la administración, se tener en cuenta el mencionado principio de autonomía territorial y la dirección política y administrativa que de dicho principio se desprende. Lo anterior es posible otorgando participación directa y autónoma en el procedimiento a cada entidad que, dicho sea de paso, conoce de primera mano sus necesidades y lo que se requiere para solventarlas, por lo tanto, es esta la llamada a establecer cuáles son los parámetros y factores de ponderación a través de los pliegos de condiciones en cada caso concreto, los cuales permitan seleccionar el oferente y la propuesta más adecuada.

  
**HÉCTOR VERGARA SIERRA**  
Representante a la Cámara